



En medio de la pandemia, el protagonismo mediático de López-Gatell

(Rodrigo Vera, pág. 6-10)

Durante la conferencia mañanera del pasado 16 de marzo, al presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaron si no le importaba contagiar de coronavirus por no usar cubrebocas. Y éste —con sonrisa sarcástica— le pidió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que respondiera en su calidad de “científico”.

Sentado a un lado del presidente, el atildado subsecretario de pelo entrecano se incorporó de su asiento y subió al podio. Ahí, con perfecta dicción, diagnosticó enfático: “La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”.

Esta escena pintó de cuerpo completo tanto a López-Gatell —a quien sus detractores consideran un “burócrata de la salud” siempre servil al poder—, como a su jefe López Obrador, quien recomienda llevar estampitas religiosas para ahuyentar la infección, desestimando el uso de cubrebocas y otras medidas dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El alto número de muertes y contagios en México se debe en gran medida a estas “omisiones” y “negligencias” en el manejo de la pandemia que encabeza el polémico subsecretario, aseguran organizaciones sociales, gobernadores, partidos políticos, legisladores y exsecretarios de Salud.

La inconformidad contra López-Gatell ya desembocó en dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR): una interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), el pasado 14 de septiembre, y otra por sus legisladores en el Senado, cuatro días después.

Raymundo Bolaños Azócar, apoderado legal del PAN y quien elaboró la denuncia del partido, afirma:

“Acusamos a López-Gatell de sabotaje, pues con sus acciones y omisiones entorpece los servicios de salud. Comete además un ejercicio ilícito del servicio público, pues incumple con su responsabilidad de proteger la vida de las personas, de aquí se desprenden los delitos de homicidio y lesiones”.

La senadora Alejandra Reynoso, una de las firmantes de la segunda denuncia, señala por su lado:



“Pese a que la OMS pide usar cubrebocas, López-Gatell descalifica estas recomendaciones, cuando debiera recomendar su uso mediante un acto administrativo. Y no entendemos cuál es su verdadera función ¿es el vocero o es el estratega? ¿está asumiendo la responsabilidad que le corresponden al Consejo de Salubridad General?... No se sabe”.

Show nocturno

Las denuncias hacen un recuento de las veces en que el presidente y el subsecretario descalificaron el uso del cubrebocas, como cuando López-Gatell aseguró, el pasado 3 de abril, que éste no sirve y sólo da “una falsa sensación de seguridad” (de hecho, en su conferencia de prensa del 28 de septiembre, utilizó el cubrebocas para limpiar sus lentes). O cuando López Obrador, el 18 de marzo, pidió a los mexicanos llevar consigo “amuletos y estampitas” para espantar al coronavirus. Y después, el 31 de julio, cuando prometió a los mexicanos: “Me voy a poner un cubrebocas ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción”.

También denuncian la aplicación del modelo Centinela para monitorear los contagios por covid-19, pues sus mediciones –argumentan– minimizan los daños de la pandemia y no es recomendado por la OMS. Igual denuncian el no haber capacitado a tiempo al personal médico para combatir el coronavirus, entre otros errores.

Ante esto, piden que se “sancione penalmente a los responsables de las miles de muertes y de las afectaciones de la salud a las personas”, principalmente a López-Gatell, por lo presuntos delitos de “homicidio”, “lesiones” y “ejercicio ilícito del servicio público”.

En migración, como el día y la noche

(Rafael Fernández de Castro, pág. 55-56)

“En los primeros 100 días de mi presidencia enviaré al Congreso una re-forma migratoria conteniendo la ruta para la regularización de los 11 millones de indocumentados que hay en este país”, afirmó Joe Biden durante el segundo debate presidencial.

Esta afirmación del candidato demócrata fue una de las más sorprendidas y valientes de ese segundo debate, incluso de toda su campaña electoral. Para los republicanos, el tema de la regularización migratoria es imperdonable. Lo interpretan como premiar a quien violó la ley.



La administración de Trump desató en sus primeros cuatro años una verdadera guerra contra los migrantes, tanto legales como indocumentados. En este terreno, Trump le cumplió de sobra a su base. Mantuvo a raya a esos “migrantes mexicanos que son criminales y violadores”. Como joya de su corona antimigratoria, cerró la frontera parcialmente desde el pasado 21 de marzo: pasan las mercancías; los migrantes se quedan estancados y están desesperados.

20 años de angustias

La comunidad migrante en Estados Unidos, en especial los indocumentados, ha sufrido por cerca de dos décadas todo ti-po de vejaciones y amenazas; en especial, la guillotina de la deportación. Una madre migrante con dos hijos, uno indocumentado y otro nacido en Estados Unidos, me lo explicó así: “Soy una madre que vive como alcohólica anónima, de 24 en 24 horas de pavor. Cada día, cuando regreso a casa por la noche después de mi larga jornada laboral, me asalta el pánico. Mi hijo el de 17 años se sale a la calle. Si hace cualquier cosa, me lo deportan. ¿Qué voy a hacer? El pequeño va muy bien en la escuela”.

En 2004 George W. Bush lanzó su campaña de reelección proponiendo una reforma migratoria –“el sistema está quebrado”–. Por 16 años ha habido un impasse migratorio. Tanto George W. Bush (2000-2008) como Barack Obama (2008-2016) apretaron las tuercas de la deportación. Si sumamos los deportados de Trump, más de 4 millones de mexicanos han sido re-movidos en las últimas dos décadas.

La guerra antimigrante de Trump

Trump, el candidato que insultaba a los migrantes, vino como “anillo al dedo” a un grupo de republicanos antiinmigración e incluso supremacistas blancos. Lo arroparon en su campaña de 2016, pero le exigieron, una vez en el poder, provocar una guerra contra los migrantes. Se trataba de Jeff Sessions, primer procurador de Justicia; Steve Bannon, primer jefe de estrategia de la Casa Blanca; y Stephen Miller, asesor de Trump y el gran estratega de la cruzada.

En la mira de Miller estaba la frontera con México. Sin escrúpulo alguno, como en la guerra, arrancaron a miles de niños de sus padres, muchos aún de pecho, para poder detener a los adultos indefinidamente. Le impusieron al gobierno entrante de AMLO el programa “Quédate en México” o Protocolos de Protección al Migrante (MPPs, por sus siglas en inglés). A través de estos acuerdos, más de 60 mil migrantes, la mayoría familias del Triángulo Norte de Centroamérica, fueron retornados a las ciudades mexicanas para esperar su proceso de asilo. Los abusos y la incertidumbre han diezmando a las familias.



Rodríguez Borgio: una historia cargada de abusos, despojos y amenazas

(Alejandro Gutiérrez, pág. 26-28)

El zar de los casinos en México, Francisco Javier Rodríguez Borgio, comparecerá ante la justicia española el miércoles 18 en calidad de investigado. Fuentes judiciales confirmaron a Proceso que se le acusa de amenazar de muerte y conspirar para asesinar a los empresarios españoles Guillermo Martínez Cárdenas, Lorenzo Sánchez Hidalgo y Andrés Valea Vera, jefe de seguridad de éstos. En esa audiencia, que se llevará a cabo en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Lorenzo del Escorial, también presentará su declaración como investigada en esa conspiración la mexicana Marcela Silerio Domínguez, quien dijo trabajar para el Cártel de Sinaloa.

Ella dijo ya haber actuado en ese fallido intento de ejecución a petición de Rodríguez Borgio, de acuerdo con el atestado policial elaborado por la Sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que este medio tuvo acceso.

Este rocambolesco caso está relacionado con la venta a Rodríguez Borgio del predio llamado Petempich cuya extensión es de alrededor de 250 hectáreas con más de 700 metros en primera línea de playa en la Riviera Maya, en el estado mexicano de Quintana Roo. La transacción se realizó en agosto de 2015.

Durante los primeros cinco años del acuerdo fallido hubo una serie de desacuerdos, estafa y espionaje, así como amenazas, sobornos a un funcionario del gobierno estatal, encabezado en esas fechas por el priista Roberto Borge (2011-2016).

Las autoridades pidieron también la extradición a México de los españoles y en agosto de 2016 el hijo de Rodríguez Borgio sufrió un atentado en Querétaro, en el que se acusó a un abogado del despacho mexicano –Joaquín Ramos Balea, representante de los empresarios españoles–, quien fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras dos años de prisión. En alguna etapa de esta historia las partes recurrieron a connotados, abogados mexicanos como Javier Coello Trejo y Diego Fernández de Cevallos. La trama conecta a México, Estados Unidos y España.